



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-011-2007-01158-01
Demandante:	María Doralba Vergara Marín
Litisconsorte necesaria por pasiva:	Gloria Piedad Rivera Arcila
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación y Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Once Laboral del Circuito
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique

**Temas: PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA CÓNYUGE Y  
COMPAÑERA PERMANENTE, INTERESES MORATORIOS E  
INDEXACIÓN**

**AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

Tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, CARLOS JORGE RUIZ BOTERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada sustanciadora, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN en contra de COLPENSIONES, proceso al cual fue vinculada como

LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA. Radicado 05001-31-05-011-2007-01158-01.

## **ASUNTO**

Se decide por la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la litisconsorte necesaria por pasiva, señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, respecto de la Sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del presente proceso. De igual forma se conoce en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de la señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN y de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPESIONES.

Se advierte, que mediante auto proferido el 24 de febrero de 2020, se corrió traslado a las partes por el término de cinco (5) días, a fin de que presentaran alegaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal Laboral, modificado por el artículo 40 de la Ley 712 de 2001, recibéndose alegatos de los apoderados de todas las partes.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La Señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN, instauró ante los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín –Reparto-, demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra del extinto INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo se condene a la demandada, a reconocerle la pensión de sobrevivientes, desde el 1º de diciembre de 1993, con su retroactivo, junto con las mesadas ordinarias, los intereses moratorios y la indexación, precisando que en caso de que estas dos últimas pretensiones sean incompatibles, se le reconozca la que mayores beneficios le reporte.

Para fundamentar los anteriores pedimentos, indica la actora que estuvo casada con el señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro, quien falleció el 19 de diciembre de 1993, el mismo que contaba con 412 semanas cotizadas al momento de su muerte, solicitando en abril del 2006 la prestación, procediendo la demandada, por Resolución No. 019072 del 28 de agosto del 2007, a negar la misma; explicando que la demandante vive de las pequeñas ayudas que le brindan los vecinos y familiares, ya que no cuenta con ningún ingreso económico.

Agrega que la decisión de la demandada de negarle a la actora la pensión de sobrevivientes, es ilegal e injusta, debiendo tenerse en cuenta el postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, que se basa por excelencia en el principio de la condición más beneficiosa.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al dar respuesta a la demanda, indicó que se realizaron gestiones administrativas por el grupo de verificación de la gerencia seccional de pensiones, obteniéndose pruebas contundentes, como las que figuran enumeradas en el extracto de la investigación administrativa aportado, por lo que no hay lugar a pagar la pensión de sobrevivientes, al no existir convivencia de manera permanente, entre el causante y la accionante.

Con el fin de enervar las pretensiones de la demanda, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de la prestación solicitada, buena fe de la entidad demandada, imposibilidad de condena en costas e intereses moratorios, la genérica, prescripción y compensación.

Efectuadas las notificaciones, la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, dio respuesta a la demanda, indicando que la señora María Doralba

Vergara Marín, solicitó en abril del 2006 la pensión de sobrevivientes a la demandada, sin asistirle derecho a la misma, por haber convivido tan solo por 4 años con el causante, y no convivir con éste para el momento del fallecimiento, obteniendo la accionada, en la investigación administrativa realizada, pruebas contundentes de las cuales se desprendía la no convivencia de la pareja, llamando la atención el hecho de que la misma hubiere reclamado la prestación 13 años después del fallecimiento de su cónyuge.

En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

### **1.3.- DECISION EN SEDE DE TUTELA**

Inicialmente el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 15 de septiembre del 2009, condenó al Instituto de los Seguros Sociales, a reconocer a la demandante, la pensión de sobrevivencia, a partir del 2 de mayo del 2002, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, suma de dinero que debería de cancelar la entidad, debidamente indexada, desde el momento en el que se reconoció la prestación.

No obstante, la Sala Cuarta de Decisión Laboral de este Tribunal, con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Gloria Piedad Rivera Arcila en contra de Colpensiones, del Juzgado de conocimiento y de la señora María Doralba Vergara Marín, profiere Sentencia el 29 de junio del 2016, declarando que en este proceso, se incurrió en una vía de hecho por error inducido y en consecuencia tuteló el derecho al debido proceso de la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, dejando sin efectos la Sentencia proferida dentro del mismo, el 15 de septiembre del 2009 y los procesos consecuenciales a ésta, con el fin de que se vincule en el proceso ordinario laboral referido, a la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, como litisconsorte necesaria por pasiva.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, por medio de providencia del 27 de julio del 2016, adicionó el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Medellín, en el sentido de ordenar a Colpensiones, dejar sin efecto la Resolución GNR 397981 del 2015, mediante la cual se dio cumplimiento al fallo judicial, así como que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha providencia, mientras se adelanta el proceso judicial, reanude y continúe el pago de la pensión de sobrevivientes, conforme a lo establecido en la Resolución No. 018062 del 2011, a las señoras María Doralba Vergara Marín y Gloria Piedad Rivera Arcila, en porcentajes iguales, teniendo en cuenta que quien figuraba como hijo menor del causante en dicha Resolución, ya cumplió la mayoría de edad y fue retirado de nómina el 1° de marzo del 2012, según se desprende del acto administrativo GNR 397981 del 10 de diciembre del 2015; ordenó al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, que en el término de los 5 días siguientes a la notificación de la providencia, proceda a rehacer la actuación, dejando sin efecto el proceso ordinario adelantado por María Doralba Vergara Marín, a partir del auto admisorio de la demanda, integrando el contradictorio con la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, en calidad de compañera permanente del causante.

#### **1.4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, finalmente decide el litigio mediante fallo proferido el tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual absolvió a Colpensiones, de todas las pretensiones incoadas en su contra, por la señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN; ordenó a la demandada, que a partir del 3 de agosto del 2018, continúe pagando a la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, el 100% de la mesada pensional que dejó causada el señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro, en cuantía equivalente a 1 smlmv, sobre 14 mesadas anuales. En cuanto a los dineros recibidos con anterioridad, por la señora María Doralba Vergara Marín, se consideran recibidos de buena fe, por lo tanto, no deberán de ser restituidos.

### **1.5.- RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de la litisconsorte necesaria por pasiva interpone el recurso de apelación en contra de la decisión de instancia y para efectos de su sustentación, indica que la demandada le reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, mediante Resolución No. 008122 de 1994; que luego en el 2007 la señora María Doralba Vergara Marín, demanda pretendiendo el reconocimiento de la prestación, que ya se encontraba devengando su representada, sin vincularla al proceso, guardando silencio la accionada respecto de esta situación, lo que generó que fuera necesario dejar sin efectos la Sentencia ya proferida, procediendo Colpensiones, por Resolución GNR 397981 del 2015, a cumplir el fallo del Juzgado, concediéndole la pensión de sobrevivientes a la demandante y de manera arbitraria, le suspende a la señora Gloria Piedad, la pensión que venía percibiendo desde 1994, ordenándole reintegrar la suma de \$88.044.611.

Mediante sentencia de tutela proferida el 27 de julio del 2016 por la H. Corte Suprema de Justicia, se ordenó a Colpensiones dejara sin efecto la Resolución GNR 397981 del 2015, ordenando que mientras se adelantara el proceso, se reanudara y pagara el 50% de la pensión de sobrevivientes a la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, considerando que a la demandada, no le asiste ninguna razón legal o de orden constitucional, para suspender la pensión de sobrevivientes a su representada, no siendo de recibo que Colpensiones ignore la prestación que válidamente le fue reconocida por el ISS, así como que no la hubiere vinculado al proceso, desconociendo que la misma estaba percibiendo la pensión de sobrevivientes desde 1994, considerando que la actitud de la entidad, vulnera de manera fragante los derechos fundamentales, por lo que no comparte la decisión del Juez de no condenar a la demandada a los intereses moratorios, desconociendo el Juez por completo dicha situación, olvidando que los intereses moratorios, son una forma de compensar el retardo, la decidía, la demora en el tiempo de la reactivación de una prestación económica que nunca debió habersele suspendido, solicitando que ante la tardanza en la

que ha incurrido la accionada, en el reconocimiento de la prestación, profiera condena en su contra por concepto de intereses moratorios, ya que solo con el pago, se interrumpe la mora, pago que aún no se ha llevado a cabo, citando como sustento, las sentencias radicados 18789 del 2003, 32679 del 2008, 32003 del 2007, 46786 del 2014, 42783 del 2012, 42783 del 2012, C 601 del 2000.

Agrega que la Corte tiene adocctrinado que para la imposición de los intereses moratorios, no es necesario examinar la buena o la mala fe de la entidad pagadora, sino solo la conducta objetiva del no pago de la prestación a los derechohabientes, ya que en ninguna de las providencias, se dice que los intereses deban estar sujetos a decisión judicial previa y mucho menos que obren por una mora injustificada, o que dependan de la buena o de la mala fe, pues la naturaleza de los intereses, no es de sanción, sino de resarcimiento.

Afirma que inclusive, pueden concurrir los intereses moratorios y la indexación, pues ambas figuras pretenden corregir la inequidad que genera que las mesadas pensionales no hayan sido recibidas por la parte que las reclama, tal y como lo ha dicho la H. Corte, en varias sentencias, entre las que se destaca la radicada 37279 del 2009, solicitando se revoque de manera parcial la sentencia, reconociendo los intereses moratorios y la indexación de las condenas.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de la señora María Doralba Vergara Marín y de la entidad pública accionada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

## **2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA**

No hay controversia alguna en torno a los siguientes supuestos fácticos:

- Que el señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro falleció el 19 de diciembre de 1993 –ver folio 28-.

- Que el causante y la señora María Doralba Vergara Marín contrajeron matrimonio el 23 de julio de 1983 –ver folio 29-.

- Que por Resolución No. 008122 de 1994, el ISS reconoció la pensión de sobrevivencia en un 50% a la señora Gloria Piedad Ribera Arcila y el 25% para cada uno de sus hijos a partir del 19 de diciembre de 1993, en cuantía del salario mínimo para dicha anualidad, –ver folios 124 a 125-.

-Que por medio de la Resolución No. 018062 del 13 de julio del 2011, aduciendo cumplir la Sentencia emitida el 15 de septiembre del 2009, por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el ISS ordenó ingresar en nómina de pensionados a la referida señora, a partir del mes de agosto del 2011, que se paga en septiembre de la misma anualidad, distribuyendo la prestación en un 25% para la señora María Doralba Vergara, 25% para Gloria Piedad Rivera Arcila y 50% para el joven Julián Andrés Restrepo Rivera –ver folios 129 a 130-.

- Que por Resolución GNR 397981 del 10 de diciembre del 2015, Colpensiones corrige la decisión anterior, para ajustarla a los términos del fallo



proferido por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, reconociendo la pensión a la cónyuge demandante, en un 100%, ingresando la prestación en la nómina de enero del 2016, De igual forma ordenó retirar de la nómina de pensionados, a la señora Gloria Piedad Arcila Rivera—ver folios 131 a 135-.

- Que finalmente por Resolución GNR 335412 del 11 de noviembre del 2016, la accionada dejó sin efectos la Resolución GNR 397981 del 2015, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ordenando la redistribución de la pensión de sobrevivientes, a Gloria Piedad Rivera Arcila el 50% y a María Doralba Vergara Marín, el 50% restante —ver folios 218 a 221-.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe la Sala determinar

¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín?

¿Debe revocarse la sentencia proferida por el Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, por medio de la cual absolvió a Colpensiones, de las pretensiones incoadas por la demandante, verificando para tal fin, si la señora María Doralba Vergara Marín, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia, con ocasión del fallecimiento del señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro?

¿Si, la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, como beneficiaria en un 100% de la prestación que le fue conferida en el fallo apelado tiene derecho a que se le reconozcan los intereses moratorios y la indexación?

### **2.4. TESIS**

Los anteriores problemas jurídicos se resuelve bajo la tesis según la cual, la demandante María Doralba Vergara Marín no acredita una convivencia real y efectiva con el señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro y por lo tanto no tiene derecho a la prestación económica de sobrevivencia como lo determinó el a quo.

Así mismo se sostendrá la tesis de que la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, en su calidad de litisconsorte necesario por pasiva no tiene derecho a que se le reconozcan los intereses moratorios, pero si la indexación y por lo tanto la sentencia debe ser ADICIONADA Y CONFIRMADA, como se explica:

### **3. CONSIDERACIONES**

#### **3.1. PREMISAS NORMATIVAS**

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 Jun 2009, SL42828 del 1º Feb 2011, SL 7358 (46780) del 23 jun 2014, por lo tanto y en atención a que el causante, Arnulfo de Jesús Restrepo Castro, falleció el 19 de diciembre de 1993, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia, está gobernada por lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990.

Es de señalar que, en este asunto, no se controvierte que el afiliado fallecido dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios, la cual fue reconocida en favor de sus dos hijos, por lo cual corresponde, entonces, determinar, si la demandante y la interviniente

cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de la prestación, conforme lo exigen los artículos 27 y 30 del Decreto 758 de 1990, que dispone en lo pertinente:

*ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derechos habientes:*

*1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera permanente del asegurado. Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente:*

- a) Por muerte real o presunta;*
- b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;*
- c) Por divorcio del matrimonio civil y,*
- d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.*

*Artículo 30. PERDIDA DEL DERECHO Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:*

*1. El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento del deceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía. En este evento el compañero o compañera permanente del causante no tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. “*

Es importante señalar que el artículo 25 del decreto 758 de 1990, no exige que la cónyuge cumpla con un término de convivencia, el cual fue establecido en la ley 100 de 1993 (dos años) y las normas posteriores que la modifican, ley 797 de 2003, (cinco años), sin embargo, debe probarse la convivencia para el momento del fallecimiento, en tanto, su ausencia es causal de pérdida del derecho en los términos del artículo 30 del citado decreto.

Igualmente, cabe puntualizar que la norma no establece el derecho a la prestación del cónyuge separado de hecho, pues esta previsión fue incorporada por el legislador en el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que, como ya se indicó, no regula la situación bajo estudio, toda vez que el causante falleció el 19 de diciembre de 1993, recordando que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia solo reconoció la prerrogativa a la pensión de sobrevivencia de los cónyuges separados de hecho, que se rigen por la citada ley 797 de 2003, a partir de la sentencia radicación 40055 de 2011, reiterada, entre muchas otras, en las sentencias SL 13276 del 10 de septiembre de 2014, SL 16949 del 23 de noviembre de 2016, SL 3747 del 05 de septiembre de 2018, SL 2232 del 25 de mayo de 2019, entre otras.

Ahora bien, La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, ha precisado el alcance del artículo 27 del decreto 758 de 1990, determinando que se entiende que falta el cónyuge en los casos en los cuales ha cesado en forma definitiva la convivencia entre los esposos.

Al respecto se pronunció en la sentencia SL 2444 del 22 de febrero de 2017, indicando:

*“En efecto, el artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 dispone que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o compañera permanente del asegurado. En este sentido, precisa que falta el cónyuge en cuatro eventos: i) por muerte real o presunta, ii) por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, iii) por divorcio del matrimonio civil y iv) por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes. Respecto de esta disposición, recientemente esta Sala se pronunció para indicar que allí no se consagró un listado taxativo de situaciones en las cuales se pueda predicar la ausencia o falta de cónyuge supérstite para que el compañero o compañera permanente acceda a la prestación de sobrevivientes, sino que existen otros eventos en los que se predica la dejación definitiva de la comunidad de vida de los esposos, salvo la excepción prevista en el artículo 30 del del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por lo que corresponde al juez laboral examinar las circunstancias*

*particulares de ausencia de convivencia y no limitarse a verificar las eventualidades meramente formales de disolución del vínculo matrimonial, previstos en el artículo 27 de dicha normatividad.*

*En efecto, en la sentencia SL14005-2016, se asentó: Lo anotado obliga en esta oportunidad a precisar tal entendimiento y en ese sentido a rectificar cualquier discrepancia de orden doctrinario que sobre tal punto existiere, pues, como antaño ya lo hubiera dicho la Corte con toda nitidez, la falta de cónyuge a que se refieren disposiciones de la naturaleza anunciada, como otras de similar orden, tal el caso del artículo 6° del Decreto 1160 de 1989 que fuere derogado en lo pertinente por el artículo 4° de la Ley 1574 de 2012, no es restrictiva a los eventos previstos en los literales del referido artículo 27 del Acuerdo 049 de 1990 (...). “Y ello es así, por cuanto la falta de cónyuge también puede ocurrir, por ejemplo y fuera de las anunciadas eventualidades, por haberse perdido entre los cónyuges la cohabitación o convivencia, elemento esencial de tal clase de vínculos jurídicos, por circunstancias no atribuibles al pensionado fallecido (artículo 7° del Decreto 1160 de 1989); y aún, por haber cesado definitivamente la vida en común con el causante, salvo cuando el cónyuge sobreviviente se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque aquél abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía (artículo 30 del citado acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de la misma anualidad). (..) Más aún cuando quiera que, se insiste, disposiciones como las estudiadas, las cuales enmarcan la situación del cónyuge y el compañero permanente sobreviviente, no son taxativas y en ellas mismas se conciben situaciones de exclusión de quien formalmente ostenta la calidad de cónyuge, con base en la ausencia del elemento determinante y esencial de comunidad de vida.”.*

### **3.2. DEL CASO CONCRETO**

En el sub judice, se tiene que la señora María Doralba Vergara Marín, contrajo matrimonio con el señor Arnulfo de Jesús Restrepo, el 23 de julio de 1983, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Sonsón, solicitando la prestación a la demandada, la misma que le fue negada por medio de la Resolución No. 019072 del 28 de agosto del 2007, por considerar que no existió convivencia entre la pareja —ver folios 16 a 17—.

De igual forma se verifica que la prestación fue solicitada por la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, quien alegó la condición de compañera permanente, el 10 de febrero de 1994, quien reclamó en nombre propio y en representación de sus hijos menores, Juan Camilo y Julián, prestación que fue reconocida por la demandada, por Resolución No. 008122 de 1994, a partir del 19 de diciembre de 1993, en cuantía del salario mínimo para dicha anualidad, reconociendo el 50% a la señora Gloria Piedad y el 25% para cada uno de sus hijos –ver folios 124 a 125-. Presentando la señora MARIA DORALBA VERGARA, en calidad de cónyuge la reclamación de la prestación en controversia para el mes de abril de 2006.

### ***De la prueba testimonial***

Si bien la prueba de la convivencia no está sujeta a tarifa legal, es innegable que el testimonio es el medio probatorio conducente para acreditarla, en este asunto fueron escuchados los testimonios de las señoras LUZ ALBA MARÍN GIRALDO, MARÍA NORA GALEANO DE PANESSO y AMPARO GALEANO DE RINCÓN, allegados por la parte actora, señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN, siendo la primera de ellas, prima de la demandante y las dos restantes, vecinas de Sonsón, respecto a cuya versión, comparte la Sala la valoración del a quo, en cuanto a no acreditan la convivencia para el momento de la muerte del causante, pues aunque las mismas afirmaron que la demandante y el causante eran casados, que no tuvieron hijos y que convivieron hasta el momento de la muerte del afiliado, del despliegue de su declaración se establece que su testimonio es indirecto.

La señora LUZ ALBA MARÍN GIRALDO, afirmó que ella solo visitaba a la pareja cada año cuando salía a vacaciones, se quedaba de un día para otro en la finca y luego se iba para Sonsón, pero reconoce que no sabe si el señor Arnulfo dormía todos los días en la finca con María Doralba, ni en qué fincas laboraba, afirmando que su prima vivía de lo que el causante le daba.

Manifiesta que la demandante vivió con el causante en Sonsón mucho tiempo, por ahí unos 9 años y luego se fueron a vivir a la Ceja.

Por su parte, las señoras MARÍA NORA GALEANO DE PANESSO y AMPARO GALEANO DE RINCÓN, expresaron que nunca visitaron la casa en la que vivía la demandante con su cónyuge, indicando que lo saben lo conocen porque cuando la pareja iba a Sonsón a visitar a sus padres, les contaban, anotó la señora Amparo Galeano, que cuando la pareja se fue para la Ceja, ella ya no supo directamente de ellos, pero ellos iban mucho a Sonsón y se veían muy contentos, que no recuerda ni el rostro de Arnulfo y que tampoco podría describirlo físicamente porque no se acuerda.

La demandante, al rendir el interrogatorio de parte, no logró precisar los nombres de las fincas en las que vivieron y en las que su cónyuge laboró, así como los nombres de los empleadores del mismo, desconociendo quien reclamó las prestaciones sociales, causadas con ocasión del fallecimiento del señor Arnulfo, expresando que ella convivió con el afiliado desde 1983 hasta 1993 y que no había reclamado la pensión, porque no sabía que tenía derecho a la misma.

Así mismo, fueron recepcionadas las declaraciones de los señores HUGO ALBEIRO y ROSA ELENA RESTREPO CASTRO, así como de MARÍA TERESA ARANGO TORRES, testigos presentados por la litisconsorte necesaria por pasiva, señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, siendo hermanos del causante los dos primeros y la última amiga de la litisconsorte, desde hace 23 años, la última de ellas, explica que el causante y la señora Gloria, vivían en una finca en Llanogrande, que eran los mayordomos, que al afiliado lo mataron en la Ceja en una cantina o taberna, que Gloria y el causante eran pareja, que el afiliado no tenía ninguna otra pareja, que vivieron juntos desde 1986 o 1987 y hasta cuando fallece el señor Arnulfo y que tuvieron 2 hijos.

Los hermanos del causante, cuyos testimonios resultan relevantes por su cercanía al núcleo familiar, desmienten la versión de la cónyuge, pues afirmaron que su hermano se casó con María Doralba, pero que vivieron muy poco tiempo juntos, entre 1 o 2 años aproximadamente, expresando que ni siquiera vieron a María Doralba en el entierro de Arnulfo, explicando la señora Rosa Elena Restrepo Castro, que su hermano y María Doralba, solo vivieron en Sonsón y que Gloria Piedad y Arnulfo, vivieron un tiempito en una finca con ella, luego se pasaron para otra finca más abajito y luego para Llanogrande, ahí ya no se veían casi, porque era muy difícil llegar, agregando que el causante iba con Gloria a la casa de sus padres, y ella estaba presente en las reuniones o fiestas familiares.

El señor Hugo Albeiro Restrepo Castro declaró que su hermano vivía en una finca en Llanogrande llamada Manancol con la señora Gloria Ribera, murió en la Ceja, porque estaba con unos hermanos en una taberna, su hermano se casó con María Doralba en 1984, para cuando murió no convivía con María Doralba, su hermano y María Doralba vivieron un año y medio o dos, el causante y Gloria Piedad vivieron 6 o 7 años

### ***Investigación Administrativa***

Aparece en el plenario, a folio 52, el memorando del 8 de agosto del 2007, expedido por la oficina de investigaciones del ISS y dirigido al grupo de sustanciación, en el trámite de la reclamación presentada por la señora MARIA DORALBA VERGRA MARIN, en la cual también se concluye que no había convivencia entre la demandante y el causante para la fecha de su deceso, se deja constancia que el apoderado manifestó que fue imposible aportar las direcciones de convivencia del causante y la peticionaria, al igual que la última empresa donde trabajó el causante, por cuanto las averiguaciones que estaba haciendo le generaron algunos inconvenientes con las autoridades policiales del municipio de la Ceja, que la reclamante se mostró muy confundida y



dudosa en los domicilios de convivencia que tuvo con el causante, de igual forma no tuvo conocimiento en que empresa trabajaba su cónyuge al momento de fallecer, ni en que fincas trabajó, ni a qué persona entregaron las prestaciones sociales del afiliado; que la testigo aportada afirmó que la convivencia se dio en casa de los padres de la demandante, en el municipio de Sonsón, que nunca los visitó en la Ceja, lugar y fallecimiento del causante; concluyendo que no existió convivencia de manera permanente entre el causante y la actora, al momento del fallecimiento.

Sobre la validez de esta investigación, debe señalarse que la misma no fue tachada ni desconocida por la accionante y no hay discusión sobre la facultad de las entidades públicas o privadas, que tienen a su cargo el reconocimiento de las prestaciones del sistema de seguridad social, para realizar investigaciones administrativas a efectos de verificar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de las prestaciones a su cargo.

La Corte suprema de Justicia, en sentencia SL1699 del 9 de febrero de 2016 (49306), refiriéndose a este tema, indicó:

*“Del contenido de la resolución mencionada, se desprende que el ISS negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con base en que con la investigación administrativa se pudo determinar que el demandante devengaba una pensión equivalente a dos veces el salario mínimo legal, y además, habitaba en casa propia, concluyendo que los accionantes no eran dependientes económicos del hijo fallecido. De dicha valoración no se desprende un error de hecho, o por lo menos con el carácter de evidente, pues ciertamente el mismo permite afirmar que los demandantes no eran subordinados económicos del causante por tener ingresos mensuales que le permitían subvenir las necesidades básicas del hogar conformado por los promotores del juicio. Como quiera que la comunicación mediante la cual la empresa negó la pensión de sobrevivientes tuvo sustento en la investigación administrativa que llevó a cabo el ISS, es razón por la que tampoco se avizora un error evidente de hecho en su valoración, **en tanto el resultado de dicha investigación no fue desvirtuado**, o cuando menos no se demuestra en casación que el tribunal se hubiera equivocado en ese ejercicio de apreciación probatoria” ...*

Así las cosas, concluye esta Colegiatura, que tal y como lo determinó el fallador de primera instancia, el señor Arnulfo de Jesús Restrepo Castro, para la fecha del fallecimiento, no se encontraba viviendo con la demandante, sino con la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, puesto que la señora María Doralba Vergara Marín, no logró acreditar la convivencia para el momento de la muerte, pues las testigos arrimadas al Despacho son de referencia, al conocer de las situaciones que narraron en la diligencia, por lo informado por la propia demandante.

Por lo tanto, la decisión será confirmada en este punto.

### ***En lo relacionado con los intereses moratorios***

Atendiendo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Gloria Piedad Rivera Arcila, se tiene que en el sub lite, se presenta una de las situaciones que exoneran a Colpensiones, del reconocimiento de intereses moratorios, de acuerdo con el precedente contenido en las sentencias SL 703 de 2013 y SL 4174 del 02 de octubre de 2019, radicación 54375, como lo es la existencia de controversia entre potenciales beneficiarias de la prestación, frente a la cual expresamente el legislador, en el artículo 6 de la ley 1204 de 2008, señaló que las Administradoras carecen de competencia para resolver en sede administrativa.

Se observa además que Colpensiones acató las decisiones que se profirieron en este asunto, inicialmente por el Juez ordinario y posteriormente por el Juez de tutela, no siendo arbitraria su conducta.

Por lo tanto, es claro como la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, no tiene derecho a los intereses moratorios, pero si a la indexación, como mecanismo de actualización de la condena, por lo tanto, si bien técnicamente debería revocarse la sentencia de primera instancia en este punto, toda vez que

el Juzgado no incluyó en la parte resolutive de la decisión la absolución de la indexación, lo procedente es ADICIONAR la Sentencia de primera instancia, ordenando a Colpensiones a reconocer la indexación.

### ***Descuentos en salud***

De igual forma se hace necesario adicionar el fallo, en el sentido de autorizar a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a efectuar los descuentos en salud desde que la señora Gloria Piedad Rivera Arcila adquiere el estatus de pensionada, los cuales deberán ser girados a la empresa promotora de salud a la cual se encuentre afiliada la misma.

## **4. DECISION**

Por las consideraciones anteriores se CONFIRMARÁ y ADICIONARÁ la Sentencia de Primera Instancia.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

### **FALLA:**

1.- Se **ADICIONA el numeral segundo** de la Sentencia apelada y consultada, proferida el 3 de agosto del 2018 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA DORALBA VERGARA MARÍN en contra de COLPENSIONES, proceso al cual fue vinculada como LITISCONSORTE NECESARIO POR

PASIVA la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, en el sentido de autorizar a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a efectuar los descuentos en salud desde que la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA adquiere el estatus de pensionada, los cuales deberán ser girados a la empresa promotora de salud a la cual se encuentra afiliada la misma.

2.- Se **ADICIONA** la providencia en el sentido de CONDENAR a COLPENSIONES, a reconocer la indexación de las sumas que deberá de cancelar, a favor de la señora GLORIA PIEDAD RIVERA ARCILA, desde la fecha en la que se causó cada mesada pensional y hasta la fecha del pago.

3.- Se **CONFIRMA** en las demás partes la providencia.



4.- Sin costas en esta instancia.

5.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**